

Editorial

Dos realidades opuestas en el mismo país

En El Salvador es costumbre evaluar los primeros cien días de un nuevo gobierno. No se trata de evaluar su gestión, porque el tiempo transcurrido es poco para eso; sino de valorar sus iniciativas y sus perspectivas de mediano y largo plazo, teniendo como trasfondo las promesas de campaña y las de primera hora, y la gestión anterior (ver Editorial "Pronóstico reservado: más allá del voluntarismo", 668, p. 515 ss.). Las valoraciones de la opinión pública, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (también en esta edición), son extremadamente positivas. La mayoría tiene una buena opinión del presidente Saca, por cumplir sus promesas, por prestar atención a la gente, por su interés en contener la corrupción, por su compromiso con el cambio y la concertación. Casi la mitad de la población no encuentra ningún fallo en él. En consecuencia, le otorgan una nota promedio muy buena (7.27, en una escala de 0 a 10), que ninguno de sus antecesores obtuvo, en el mismo periodo, en más de dos décadas.

Al colocar estas primeras valoraciones en el contexto de la realidad nacional, el panorama se complica más de lo aparece a primera vista. En El Salvador actual coexisten dos realidades, una virtual, cultivada con esmero e intensidad por el aparato publicitario de Casa Presidencial, el cual incluye a las grandes empresas mediáticas, a las cuales el presidente Saca se ha sabido ganar y colocar de su lado, y otra muy distinta, la de la inmensa mayoría de la población, la del desempleo, la falta de acceso a los bienes públicos, en una palabra la de la pobreza. Hasta ahora, estas realidades coexisten sin entrar en contacto; pero en el momento en que lo hagan, el encanto del gobierno y del presidente Saca comenzará a esfumarse. Sin embargo, es imposible predecir cuándo llegará ese momento, ni cuáles podrían ser sus consecuencias concretas.

1. Ambigüedades de un gobierno muy bien evaluado

Es indudable que el nuevo gobierno llegó con un estilo más cálido y cercano a la población. No se puede negar que el nuevo presidente tiene mejores relaciones públicas que el anterior, en particular con los medios de comunicación de masas —sabe cómo tratarlos, cómo agradarlos. Ese ha sido su mundo hasta ahora. Además, tiene a su favor que lo nuevo y poco conocido genera expectativas de que la forma de gobernar puede cambiar. En este sentido, su labor es potenciada por un gabinete integrado por personas poco conocidas para la opinión pública y por la distancia abismal respecto al ex presidente Flores. Pero esto no significa que la realidad vaya a cambiar como para que las condiciones de vida de la mayoría mejoren.

Aprovechando el terreno ganado, la publicidad presidencial comenzó incluso antes de arribar a los cien días. Pareciera que su objetivo era saturar el ambiente de tal manera que las voces críticas fuesen inaudibles. No obstante la impresión de apertura y cercanía, esa conducta publicitaria es más propia de regímenes autoritarios, muy dados a aplastar con los recursos del poder cualquier visión contraria o alternativa, que de uno que se precia de democrático. Aunque las diferencias con el talante del gobierno anterior saltan a la vista, la publicidad de Casa Presidencial es bastante parecida. Entre un gobierno y otro hay más continuidad de la que aparece a primera vista. El abuso de la publicidad no es la mejor señal de seguridad y estabilidad gubernamental. Pareciera que Casa Presidencial está ansiosa por presentar resultados, hasta el punto de dar por cumplidas algunas promesas que no pasan de ser simples iniciativas —protección al consumidor, ampliación de la cobertura y calidad de la educación y del seguro social. La evaluación debiera hacerla la población y no una dependencia presidencial; aparte que las obras de beneficio público, precisamente por su carácter, son visibles por sí mismas.

Dos ejemplos ilustran esto último. El mensaje de los medios masivos de comunicación, cuando el presidente Saca inauguró el nuevo hospital general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, evento ocurrido en los primeros cien días, afirmaba que con este acto cumplía una de sus promesas de campaña y, además, que el mandatario está preocupado por la salud de la población; pero silenció que la reconstrucción de este hospital comenzó hace más de cinco años. El otro ejemplo es la aprobación del presupuesto nacional de este año, la cual también ocurrió poco después de que Saca asumiera la dirección del poder ejecutivo. La incapacidad del ex presidente Flores para conseguir dicha aprobación es evidente y puede ser explicada de formas diversas; pero eso tiene sin cuidado a la gente, lo importante es que el presidente Saca, en pocos días, consiguió lo que su antecesor no pudo conseguir en meses. Sin embargo, la prensa silencia cómo y a cambio de qué, el nuevo mandatario consiguió esa aprobación. De esta manera, ante la opinión pública se presenta con nitidez el contraste entre dos estilos de gobierno.

No es posible negar que el gobierno de Saca ha hecho un esfuerzo por hablar con ciertos sectores políticos y sociales sobre algunos temas de importancia na-

cional y ha demostrado saber escuchar. Esta actitud de apertura calculada contrasta con el aislamiento, la arrogancia y la prepotencia del mandatario anterior y hace que el actual aparezca más cercano de lo que es en realidad. Aunque es obligado reconocer que la crispación, creada por el ex presidente Flores, ha desaparecido. Sin embargo, el diálogo prometido con la ciudadanía común y corriente aún no ha tenido lugar. El presidente Saca se ha dedicado más bien a recorrer el país al estilo tradicional, es decir, inaugura obras y pronuncia discursos. Tampoco ha consultado sobre todos los temas de la agenda nacional. Parte del esfuerzo ha sido mejorar la relación del poder ejecutivo con las otras instituciones del Estado, incluidas las relaciones entre el presiden-



te y su vicepresidenta, las cuales ahora son de cooperación y no de enfrentamiento abierto, como fue el caso del ex presidente Flores y su vicepresidente. No obstante, los enfrentamientos institucionales tradicionales —entre el gobierno central y los gobiernos locales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los altos funcionarios fiscalizados, la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil, estas dos y los jueces, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura, etc.— continúan. Con todo, el ambiente institucional es ahora más propicio para llevar a cabo una buena gestión, en beneficio de la población.

Aun así, el gobierno de Saca ha dejado pasar oportunidades para enfrentar algunos de los problemas nacionales más graves —el transporte público, los centros penales, la violencia social, la inseguridad ciudadana y sobre todo las pandillas juveniles. A veces pareciera que no se atreve a enfrentarlos, aun cuando son desafíos abiertos a su autoridad y constituyen una amenaza para el bienestar social. Este gobierno no interviene cuando se trata de enfrentar grupos de poder muy bien organizados, como el gremio del transporte público; ni cuando los desafíos sobrepasan su capacidad de comprensión, como los centros penales, la violencia social y la inseguridad ciudadana. La respuesta típica es aprobar más leyes, enmarañando aún más una legislación ya bastante dispersa y contradictoria, y amenazar con más

años de cárcel, lo cual es ineficaz para lo que pretende. Estos desafíos representaban una oportunidad para ganar credibilidad al demostrar, de manera palpable, su capacidad de gestión. Es así como las diversas mesas de concertación corren el peligro de hablar de lo menos relevante y más pronto que tarde, se pueden agotar como recurso para el entendimiento sociopolítico, al negárseles la oportunidad para influenciar las decisiones políticas. En las mesas más cruciales, la de gobernabilidad o seguridad ciudadana, por ejemplo, no hay relación directa entre sus discusiones y la política nacional.

Los espacios de diálogo abiertos no significan que el presidente Saca esté dispuesto a romper con la tradición política autoritaria nacional. Algunos temas importantes no los ha discutido, tampoco ha consultado a la oposición política y muchos menos a la sociedad, aun cuando sus decisiones les conciernen de forma directa. Pudiendo hacerlo, no intervino para impedir la elección ilegal de un magistrado electoral; envió un tercer contingente de soldados a Irak, en contra de la voluntad mayoritaria de la opinión pública, que desea a El Salvador fuera de ese conflicto; elevó la edad de jubilación y tampoco está dispuesto a subir el salario mínimo, una promesa de campaña, descartada con los viejos argumentos de gobiernos anteriores. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos tampoco entran en la agenda de discusión. La petición de abrir el caso del asesinato de Mons. Romero, a raíz de la condena de uno de los autores intelectuales por un juez estadounidense, fue rechazada con los mismos argumentos de todos los ex presidentes de ARENA. Esta pertinaz negativa a investigar estos hechos, ha llevado al Estado de El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ha sido acusado por no colaborar en la búsqueda de niños desaparecidos durante la guerra. El presidente Saca descarta el pasado con el pretexto de estar dedicado al futuro. Ni siquiera está interesado en la investigación de los asesinatos que más impacto causaron en la sociedad salvadoreña, después de 1992. Pero su esfuerzo es doblemente vano, porque con esa actitud no elimina el pasado, ni su memoria, ni fortalece un sistema judicial desacreditado y bastante corrupto. Ciertamente, esta no es la mejor manera de construir un futuro sólido. La apertura prometida no comprende estos temas y la justicia tiene un techo, impuesto por el poder.

Aun así, el presidente Saca se ha apoderado del discurso social de la izquierda, en particular de su representante más conspicuo, el FMLN. Se apropió de sus temas predilectos, a tal punto que la cuestión social es ahora, según su interpretación arbitraria, un tema de siempre de la derecha. Esta estrategia ha arrinconado al FMLN, en el escenario de la política nacional. En estos tres meses, el presidente Saca retomó los temas conflictivos e incluso se adelantó al FMLN para desactivarlos, al menos por ahora. Según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, casi la mitad de la población considera que este último hubiera gobernado peor que el gobierno actual, en caso de haber ganado las elecciones. De esta manera, respaldado por las grandes empresas mediáticas, el presidente Saca se ha apoderado de la escena política sin dejar espacio para ningún otro actor, ni siquiera para sus ministros. El centro de la publicidad es él y Casa Presidencial. Es tal en afán de

protagonismo, que también ha arrinconado a su propio gobierno. La situación estaba madura, dada la experiencia negativa con el gobierno anterior. En estas circunstancias, no era muy difícil apoderarse del escenario político. Si el presidente Saca consigue su propósito, la oposición no podrá impedir otro triunfo electoral arrollador, a principios de 2006. Las divisiones internas del FMLN y su pérdida del rumbo social y político facilitan el trabajo al mandatario y a ARENA. Pareciera que al FMLN no le queda otra salida que esperar que las dos realidades, la virtual y la de la gente, hagan contacto para aprovecharse de las consecuencias, cuando el juego de imágenes de Casa Presidencial se vuelva insostenible (en esta misma edición se hace un análisis de la situación del FMLN y de sus posibilidades).

Con tan pocos resultados concretos y una publicidad tan intensa sobre sus logros, no queda más que concluir que el gobierno de Saca ha caído en el populismo, que tanta aversión causa a la derecha salvadoreña. Es cierto que es un populismo punitivo, pero populismo al fin de cuentas. Supuestamente, este vicio era exclusividad de la izquierda, la cual es acusada con frecuencia de aprovecharse de las necesidades de la población para obtener ventajas políticas. El gobierno actual también se ha aprovechado, al igual que el anterior, del clamor ciudadano por la seguridad para sacar réditos sociopolíticos muy valiosos. Pero, no ha avanzado mucho; la ya elevada tasa de homicidios ha aumentado, pese a la represión de las pandillas juveniles y la política de captura masiva de sus miembros ha agravado el estado de unos centros penales ya sobre poblados y en malas condiciones. El gobierno de Saca piensa más en las próximas elecciones que en las necesidades de la gente. Mejor sería que, sin perder de vista las elecciones próximas, hubiese demostrado cómo se pueden abordar las cuestiones que tanto afectan a la sociedad, sin distinción de ideologías políticas, ni clases sociales. El vicio del populismo no es, pues, exclusividad de la izquierda. El gobierno anterior y el actual han echado mano de él para acumular votos y opiniones favorables, con lo cual ocultan sus fallos y su incapacidad de gestión. En esto, como en otras políticas, la derecha salvadoreña no es diferente a las otras derechas latinoamericanas, las cuales también han recurrido al populismo punitivo y a propagar el temor y la desconfianza entre la población como un instrumento eficaz para ganar elecciones (ver Editorial "Elecciones sin alternabilidad", 665-666, pp. 209 ss.).

El presidente Saca ha ganado la primera partida a su principal rival político, el FMLN. En buena medida, debido al hábil manejo de la publicidad de Casa Presidencial. En contra de lo que ésta proclama, cien días no es un periodo lo suficientemente largo como para cumplir unas promesas que, por otro lado, son complejas. Lo que da por hecho es simple iniciativa o plan, o, a veces, es obra del gobierno anterior. Las intenciones son buenas, pero no hay financiamiento; algunas propuestas son novedosas, pero hay mucha continuidad con el gobierno anterior. El presidente Saca aseguró, en su primer discurso, que el poder no lo cambiaría. Cien días después, conviene recordarle que lo

importante es que él cambie al poder. Una señal promisoría sería descansar menos en publicidad y más en crear bienes públicos; destinar el presupuesto de publicidad, viajes, viáticos, etc., a prevención y educación. De momento, las señales son ambiguas, algunas crean expectativas, pero otras confirman la continuidad con el pasado. El pronóstico, por consiguiente, sigue siendo reservado.

Los espacios de diálogo abiertos no significan que el presidente Saca esté dispuesto a romper con la tradición política autoritaria nacional.

[...] no intervino para impedir la elección ilegal de un magistrado electoral; envió un tercer contingente de soldados a Irak, en contra de la voluntad mayoritaria de la opinión pública, que desea a El Salvador fuera de ese conflicto; elevó la edad de jubilación y tampoco está dispuesto a subir el salario mínimo [...]

2. La realidad de la gente

Convertir al FMLN en el principal rival del gobierno es un grave error político. El desafío principal del gobierno de Saca es el subempleo y la mala calidad de los nuevos puestos de trabajo creados, consecuencia directa de las privatizaciones, de la dolarización, la prioridad de la maquila, la poca inversión extranjera y la ausencia de políticas sectoriales. La visión del tratado de libre comercio con Estados Unidos es equívoca. Ni los tratados ya firmados, ni la dolarización han creado los empleos anunciados por el gobierno. Tampoco lo hará este tratado. Para crear empleo hacen falta políticas sectoriales, que apoyen a aquellos sectores que lo generan, y no políticas generales como la dolarización misma, que benefician a ciertos sectores poderosos, que no se caracterizan por generar demasiados puestos de trabajo. Los tratados han sido firmados desde el supuesto de que el libre comercio y la apertura externa para la inversión conllevan al desarrollo, lo cual no está demostrado.

En el ámbito social, la demanda de más y mejores servicios de salud, educación, vivienda y medio ambiente es cada vez mayor. Todo ello agravado por la falta de fondos, debida a los bajos ingresos fiscales y al elevado endeudamiento, que casi llega al límite establecido por los organismos financieros internacionales. En el campo político, la polarización, la improvisación y el atropello siguen siendo la norma; la falta de información y de transparencia en el uso de los recursos públicos y la ausencia de una política exterior nacional y centroamericana son otros problemas que se suman a los anteriores.

Otro flanco que no puede menospreciarse, por estar muy relacionado con la demanda de soluciones a los problemas anteriores es la relación del gobierno central con los gobiernos locales. Cuando el presidente Saca habla de reformas en educación, salud, tributación, agua, etc., hasta ahora, no ha considerado su impacto

local, ni tampoco el papel que, para una ejecución exitosa, podrían asumir los gobiernos locales. De hecho, éstos representan la instancia estatal más cercana a la población. Por eso mismo, puede reaccionar con más eficacia ante las necesidades más inmediatas. En este ámbito de lo local, el gobierno de Saca debe enfrentar temas polémicos como la definición de las competencias municipales, las fuentes de financiamiento, la transferencia de fondos desde el gobierno central, la aprobación de varias leyes impositivas municipales y de una ley de ordenamiento territorial, y el futuro de las instancias centrales responsables de la relación directa con los gobiernos locales, hasta ahora dedicadas más a la infraestructura social y menos a su fortalecimiento y a la promoción del desarrollo local. Es cierto que casi todas estas decisiones son más competencia del poder legislativo que del ejecutivo, pero el mandatario puede influir de forma determinante, dado que también preside el partido de gobierno. No obstante reconocer la necesidad de descentralizar, se hace poco, pues tanto funcionarios como mandatarios, incluido el actual, tienen una aversión visceral a descentralizar, por miedo a perder poder efectivo. En la práctica, hacen caso omiso de los gobiernos locales, más aún si no son controlados por el partido de gobierno. De todas formas, el presidente Saca se ha acercado a éstos para discutir algunas de las cuestiones mencionadas; pero, al igual que con los otros sectores, aún no hay más que conversaciones.

Es normal, entonces, que la gente pida cambios en la política económica y en el rumbo del país, tal como lo muestra la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, ya citada. El poco desarrollo humano resume el problema principal para la gente. Una gran mayoría piensa que la situación económica con el nuevo gobierno es igual o empeora. Menos de una cuarta parte piensa que cambiará para mejorar. Esta gran mayoría aumenta, cuando se trata del estado de su economía familiar, predominan los que piensan que empeorará. Entre los fracasos principales del gobierno de Saca, la gente coloca la inflación y el precio del combustible. Así, pues, la unanimidad de la valoración positiva del presidente y su gobierno se disuelve, en una opinión pública que exige unos cambios que éstos no parecen estar dispuestos a impulsar. Esa unanimidad se divide en bloques similares, cuando se pregunta si la situación del país mejorará o empeorará, si ambos están preocupados por eliminar la pobreza, si serán o no capaces de resolver el problema del transporte público, si habrá justicia en el caso de corrupción de ANDA, si el mandatario controla o no sus decisiones, y la diferencia no es mucha entre quienes opinan que la reforma de las leyes penales disminuye la delincuencia y si ahora hay menos pandillas que antes.

El desacuerdo es mayoritario en la participación de soldados salvadoreños en la invasión de Irak, aun cuando haya sido una promesa de campaña —en la cual no insistió mucho. Es más, Irak es mencionado como uno de los fracasos de este gobierno, lo cual es muy notable, porque predominan las opiniones que no encuentran ninguno. Es evidente que esta promesa de campaña es rechazada por la opinión pública. La gente considera que, al enviar esas tropas a Irak, se ha puesto en riesgo innecesario la seguridad nacional, pues esa guerra no es de

su incumbencia. La fuerza del argumento presidencial es que se trata de una promesa de campaña a la cual se siente vinculado; sin embargo, también prometió subir el salario mínimo, pero esto ya lo ha descartado. Más de la mitad de la gente piensa que el agro no va a ser reactivado. Tampoco da muchas posibilidades al fortalecimiento de la democracia, aunque hay consenso en cuanto a las llamadas mesas de concertación y su potencial para resolver los problemas ahí planteados.

Por el momento, esta pérdida de unanimidad e incluso oposición a las posiciones gubernamentales no afecta la valoración positiva del presidente Saca. Por eso, se sostiene la existencia de dos realidades que no se influyen. En los primeros cien días, la realidad virtual se ha impuesto con éxito sobre la realidad de la vida cotidiana de la población salvadoreña. Mientras estas realidades no se conecten y no surja una alternativa creíble, la gente seguirá pensando en irse del país. Casi la mitad de la población desea emigrar. Si estos primeros tres meses fuesen la muestra de lo que seguirá, en los próximos cinco años, y si lo mejor estuviera llegando, el deseo de emigrar habría comenzado a disminuir. Más de la mitad de la opinión pública no comparte el optimismo del gobierno de Saca. De todas maneras, dado el rumbo que ha impreso a éste, la cuestión que se plantea es cuánto durará esa desconexión entre esas dos realidades, la virtual, creada por las imágenes y expectativas de la publicidad de Casa Presidencial, y la de la gente, que es

la del desempleo, la pobreza, la falta de educación y salud. De los primeros tres meses no se puede esperar otra cosa; sin embargo, las limitaciones más importantes para poder cumplir con los planes anunciados están a la vista. Sin un cambio drástico, que mejore la precaria situación de la población, el encanto actual podría romperse y con toda seguridad sobrevendría una nueva decepción.

La piedra angular del gobierno de Saca, la ampliación del gasto social para poder crear más y mejores bienes públicos, está sujeto a una refor-



ma fiscal. El mandatario es claro al respecto. Su urgencia es tanta que esa reforma debe ser aprobada en lo que queda del año. Pero es una reforma de alcance muy limitado, pues sus componentes más novedosos ya fueron vetados por el gran capital, el único sector importante que ha sido consultado. Esta vez, el gobierno se olvidó de preguntar su parecer a los beneficiarios potenciales. La gran empresa privada no está dispuesta a declarar su patrimonio, ni a pagar más impuestos, tampoco desea ser fiscalizada por hacienda. Al final, la reforma quedará reducida, por lo que parece, a evitar la evasión, la elusión y el contrabando; sin embargo, contrario a lo que el gobierno asegura, ello no será suficiente para reducir el déficit de manera significativa, ni mucho menos para financiar una expansión sostenida del gasto social. Las instituciones financieras internacionales han vuelto a insistir en que el gobierno debe aumentar la carga tributaria (el conjunto de impuestos), en al menos tres puntos. El presidente Saca enfatiza, en sus intervenciones con motivo de sus cien días, que no gobierna para un determinado grupo de poder. Pero es evidente que sin la aprobación del gran capital, no hay reforma fiscal y sin reforma fiscal, tampoco hay más inversión social. Es decir, el mandatario no puede gobernar sin él, ni contra él.

El presidente Saca, en consecuencia, debiera dejar la cuestión electoral en manos de su partido y dedicarse a gobernar para la sociedad, tal como lo prometió al asumir la dirección del poder ejecutivo. Su desafío más importante como gobernante no es el FMLN, sino el bienestar o, mejor dicho, el malestar de la mayoría de la población. Es cierto que hizo promesas de aumentar la inversión social de forma sustancial y no hay por qué dudar de su intención, pero no tiene dinero. Ni siquiera puede cubrir los gastos ordinarios de su gobierno. De hecho, éste ya ha anunciado que el saldo rojo del presupuesto nacional del próximo año será mayor. Por lo tanto, emitirá más bonos para financiarlo. Tampoco parece estar dispuesto a tomarse en serio la cuestión y recortar de forma drástica los dispendiosos gastos de su publicidad, los viajes, los viáticos, los vehículos, los festejos y un largo etcétera. El gobierno y sus funcionarios viven como si no hubiera crisis fiscal. El nuevo anteproyecto de presupuesto debiera expresar la voluntad política de enfrentar los problemas de la gente. La política presupuestaria se encargará de despejar las dudas sobre el alcance de su voluntad política y sobre todo de sus posibilidades reales.

No todo es, pues, color azul bandera, el color del mes de septiembre, tal como lo presenta la propaganda gubernamental, el discurso oficial y la prensa. El gobierno de Saca ha llegado a sus primeros tres meses en medio de un forcejeo con las gremiales más poderosas del capital nacional, las cuales desean todas las ventajas para ellas y no están dispuestas a ceder lo que consideran un derecho adquirido. Para defenderlo financian a ARENA, su partido, y designan al candidato para la presidencia y, no contentas con esto, también le marcan el rumbo a seguir.

3. El desafío de la reforma fiscal

Los intelectuales del gran capital, por su lado, han vuelto a la carga con la cuestión de la gobernabilidad, en días recientes. El gran capital se muestra de nuevo preocupado por el franco deterioro de la gobernabilidad, una de cuyas expresiones más elocuentes es el poco aprecio que la población salvadoreña muestra hacia la democracia, la cual no es unánime en apoyar este sistema político; una parte significativa de la misma se muestra indiferente ante él o, de manera más desafiante, prefiere un régimen autoritario, que resuelva sus problemas. La derecha salvadoreña teme el surgimiento de un dirigente de corte populista, al estilo venezolano. Sin embargo, parece hacer todo lo que está a su alcance para que eso suceda, en un futuro tal vez no muy lejano.

Es indudable que la gobernabilidad está muy deteriorada en El Salvador y que no se ponen los medios para remediarlo. Sin embargo, es llamativo que el grupo de intelectuales mejor preparado del gran capital tenga una visión tan estrecha de la crisis de gobernabilidad y de sus posibles salidas. En efecto, para él, el problema se reduce al ámbito electoral y legislativo. Su pretensión es democratizar los partidos políticos, obligarlos a informar sobre sus finanzas, hacer que los diputados rindan cuentas a sus electores, eliminar el sistema de residuos para elegirlos, etc. Supone de forma gratuita que con esas reformas rescatará la gobernabilidad y creará estabilidad y concordia social. Es indudable que el sistema electoral clama por una reforma a fondo, pero ésta debe ser parte de otra reforma más amplia que abarque al Estado como un todo. Aparte que está por verse si los partidos, comenzando por el del gran capital, están dispuestos a aceptar la reforma propuesta. Estos intelectuales de la derecha no están diciendo nada nuevo. Para eso no era necesario traer colegas españoles, que les repitieran lo que ya está muy bien explicado, en los informes de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano y en otros estudios, elaborados por intelectuales independientes y también por la UCA. Pareciera más bien que el respaldo de consultores extranjeros muy bien pagados, convierte su dictamen y sus recomendaciones en verdad indiscutible.

La gobernabilidad se deteriora no sólo, ni principalmente por el sistema electoral vigente, sino por la enorme desigualdad en el ingreso de la población salvadoreña. Entre más desigualdad, menos gobernabilidad. Es decir, entre más ricos sean los ricos y los pobres más pobres, la gobernabilidad es una meta inalcanzable. Hay, pues, que comenzar a democratizar la escandalosa desigualdad predominante, en el ingreso nacional, y el instrumento idóneo son los impuestos. Es indispensable y urgente elevar la carga tributaria con impuestos progresivos, al menos al promedio latinoamericano. En la actualidad, y desde tiempo inmemorial, El Salvador no "somos todos", tal como sostiene la consigna gubernamental. Hay algunos, unos pocos, para ser más exactos, que son más El Salvador, porque son los que acaparan casi todas las oportunidades y son casi los únicos beneficiados, pero son los que menos impuestos pagan; y hay otros, los más, que son poco o nada El Salvador, son los excluidos, los marginados y los pobres de siempre,

cuyas filas son engrosadas, desde hace algunos años, por las clases medias, cuyo poder adquisitivo pierde valor de manera alarmante.

Pero el gran capital no quiere oír hablar de esto. Su tendencia hacia la imposición está manifiesta en su pretensión de eliminar el sistema de residuos para elegir a los diputados y sustituirlo por otro que le facilite el control de la Asamblea Legislativa, a través del partido más votado. Por ahora, ese partido es ARENA, pero no tiene por qué ser siempre así. Su cálculo, de corto plazo, es que una asamblea dominada por su partido, le permitirá ejercer un control más efectivo del país. De esta manera, sus planes no serán entorpecidos por una oposición fuerte. Al limitarse a una propuesta política, y ésta muy parcial, los intelectuales de la derecha obvian el obstáculo de la desigualdad. Aunque no por eso dejan de aspirar a una democracia robusta, a contar con un país atractivo para la inversión, a la altura de los desafíos que plantea el tratado de libre comercio con Estados Unidos y, además, seguro y estable.

La derecha salvadoreña desconoce que la diferencia entre sus aspiraciones de gobernabilidad y la realidad son los bienes públicos. Cuando reclama con tanta insistencia la gobernabilidad, quisiera que El Salvador fuera como los países ricos, pero se olvida que, entonces, debe proporcionar a la población unos bienes públicos que ahora le niega. La diferencia entre estos países y El Salvador no son las carreteras, los aeropuertos, los automóviles, los cines, los centros comerciales, los restaurantes, las escuelas, las universidades, los hospitales privados, etc. La diferencia no radica en la infraestructura, porque es similar en ambos; sino en la existencia de bienes públicos. Por eso, los que tienen dinero en países pobres como El Salvador, pueden vivir como se vive en Estados Unidos, Canadá o en cualquier otro país industrializado; pero no quienes no lo tienen y quienes tampoco tienen acceso a bienes públicos, viven en pobreza.

El gobierno de Saca ha llegado a sus primeros tres meses en medio de un forcejeo con las gremiales más poderosas del capital nacional, las cuales desean todas las ventajas para ellas y no están dispuestas a ceder lo que consideran un derecho adquirido. Para defenderlo financian a ARENA, su partido, y designan al candidato para la presidencia y, no contentas con esto, también le marcan el rumbo a seguir.

La diferencia se constata en cómo vive la inmensa mayoría que no tiene dinero en El Salvador y en cualquier otro país del norte. Los ricos salvadoreños que han viajado tanto, pueden comparar cómo viven los agricultores, los trabajadores o los empleados franceses, canadienses o japoneses y cómo viven los salvadoreños. Con toda seguridad, no faltará quien objete que los agricultores y

trabajadores de esos países son más productivos que los salvadoreños y por eso pueden ganar más, sin que la economía de sus países se hunda. Eso puede ser verdad. Pero, la cuestión aquí no es duplicar o triplicar los salarios. Aunque es necesario reconocer que, además de un nivel de ingreso elevado, el estilo de vida de los trabajadores de los países ricos depende mucho de los servicios públicos, que les proporcionan sus respectivos estados —educación gratuita de un nivel elevado, buenos cuidados de salud, sistema de pensiones decente, seguridad ciudadana, sistema judicial expedito y eficaz, obras públicas espléndidas, transporte urbano eficiente y asequible y también concordia social y tranquilidad. Esta es la diferencia entre los países ricos y países como El Salvador.

El objetor puede volver a insistir y exclamar que ojalá El Salvador pudiera permitirse la prestación de bienes públicos mayores y mejores, aunque sólo fuera una parte de los que hay en los países ricos; que le gustaría que todo el mundo estuviera bien atendido y cuidado, que la justicia funcionara y que hubiera paz social y seguridad ciudadana. Pero luego agregará que el país no tiene recursos para financiar tales servicios. Esta es una visión miope, porque mayores y mejores bienes públicos le iban a significar más negocios a él y a su grupo empresarial. Aquí es donde entran los impuestos. En todos esos países que los ricos salvadoreños admiran, porque en ellos “las cosas funcionan”, el dinero para financiar los bienes públicos proviene de los impuestos —impuestos directos sobre la renta de las personas y las empresas y sobre el patrimonio, e impuestos indirectos como al valor agregado y otros. Los ricos de los países donde “las cosas funcionan” contribuyen a financiar el gasto público con una generosidad, quizás impuesta, pero por lo general aceptada. En España, un país que no es ni muy rico, ni muy avanzado socialmente, la carga fiscal es del 36 por ciento, por lo menos tres veces superior a la carga de El Salvador (12 por ciento). En Francia, la carga fiscal es superior al 40 por ciento y en Suecia, es superior el 50 por ciento. Otra diferencia, pues, entre los países ricos y El Salvador es que en los primeros se pagan muchos impuestos y en éste casi no se pagan.

Las reformas fiscales exitosas han sido posibles porque los ricos han comprendido que con sus impuestos pueden conseguir un estilo y una calidad de vida muy elevados. Es incomprensible, entonces, por qué los ricos salvadoreños han de ser diferentes a sus colegas de otros países. Un argumento que sacan a relucir es que elevar los impuestos desincentiva la inversión, pero, en realidad, tienen tal liquidez en la actualidad, que están invirtiendo fuera del país, es decir, están sacando dólares, lo cual agudiza el desequilibrio de la balanza de pagos. Esta es una amenaza más que se cierne sobre la economía nacional, alimentada por una apertura casi irrestricta, falta de inversión y productividad y agotamiento del margen de endeudamiento externo. Hasta ahora, las remesas han proveído los dólares necesarios para operar la dolarización, pero cada vez resultan ser menos ante la magnitud de la brecha que se abre. También puede que los ricos salvadoreños teman que, al pagar más impuestos, serán menos ricos o vivirán peor. Al contrario, con los bienes públicos, financiados por sus impuestos, bien vigilados, por supuesto,

para que no se pierdan en los laberintos de la corrupción, podrían vivir mejor —lo cual no sucede ahora—, en un país industrial y seguro, con una democracia estable, paz social y una población, sobre todo la juventud, dedicada a trabajar y producir.

Al presidente Saca le gusta repetir que su gobierno es de derecha, pero con un compromiso social. En la práctica, su gobierno es más de derecha que comprometido con el bienestar social de la población que gobierna. La derecha no está dispuesta a permitirle invertir en el área social, tal como a él le gustaría. Este hecho deja sin fundamento otra afirmación que también ha puesto de moda, que lo social en El Salvador

no es monopolio de la izquierda, sino de la derecha, porque sería la que más ha hecho por garantizar el bienestar de la gente. Sería más exacto decir que lo que la derecha ha hecho hasta ahora a favor de la gente es muy a su pesar. Si fuera como el presidente Saca sostiene, tendría plena libertad para financiar y ejecutar su plan de expansión del gasto social. Pero la realidad es otra. Sus planes están sujetos a los intereses del gran capital, unos intereses de corto plazo y poca visión de futuro. Este sólo parece estar dispuesto a aceptar aquellos planes que no lo afecten de forma directa. De hecho, los avances más visibles, en estos primeros cien días, se han dado en áreas periféricas a la estructura del poder económico y político.

Una parte del sector privado ha encontrado, sin embargo, un subterfugio, al cual han dado en llamar "responsabilidad social" del empresario. Según ellos, su responsabilidad social consiste en acciones aisladas, a veces permanentes, de filantropía. Hacen donaciones, más o menos importantes, a escuelas, hospitales, deportes, etc. Sin embargo, estos donativos los deducen de sus impuestos y con frecuencia, además, los utilizan para hacer publicidad de sus empresas. Esta modalidad hace caso omiso del consejo evangélico que advierte a la mano izquierda no saber lo que hace la derecha. El gran capital hace caridades con las cuales piensa haber cumplido con su responsabilidad social. Está bien que prac-



tique la caridad, una práctica muy necesaria que, además, debiera expandir y aumentar en volumen, pero ésta no puede financiar los bienes públicos. Para eso, debe pagar impuestos progresivos. La verdadera responsabilidad social de las empresas consiste en cumplir con la legislación vigente, no dañar a terceros —el medio ambiente— y dar trato digno a sus empleados, y está reñida con la evasión de impuestos, la contaminación del ambiente, la falta de información completa y veraz sobre sus productos al consumidor y con el irrespeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Al rehusarse a pagar impuesto sobre su patrimonio y sobre su renta individual y de sus empresas, y al evadir tantos impuestos indirectos como pueda y también obligaciones como la del seguro social, el gran capital pretende que las finanzas públicas continúen como hasta ahora; pero al mismo tiempo, desea estabilidad y gobernabilidad. El presidente Saca subraya que no gobierna para un determinado grupo de poder, lo cual es difícil de aceptar; pero aun concediéndole el beneficio de la duda, es claro que sin la aprobación del gran capital no puede presentar una reforma fiscal significativa, y sin ésta, tampoco hay ampliación de la inversión en el área social. Es decir, sin el gran capital, Saca no puede gobernar.

En sus primeros cien días, el presidente Saca ha roto con una época de aislamiento y prepotencia, y ha creado expectativas muy grandes y muy por encima de sus posibilidades reales de financiamiento, lo cual es muy peligroso. Por lo tanto, en breve, su gobierno deberá mostrar resultados palpables, en la línea de mejorar la situación de la mayoría de la población. La publicidad de Casa Presidencial ha sido un apoyo fundamental para crear la nueva imagen de apertura y cercanía, y para generar esas expectativas; pero su gobierno no puede mantenerse por mucho tiempo sin resultados. Es impredecible cuánto tiempo más puede sostenerse la unanimidad y la aprobación de su gestión con sólo promesas y expectativas. Lo que sí es predecible es que el gasto público no puede sostenerse durante mucho tiempo más sin un aumento sustancial de los ingresos. El mismo presidente Saca siente el apremio y reclama la reforma fiscal para antes de que concluya este año. El tiempo trabaja en contra suya. El mandatario debe adoptar pronto, en los próximos tres meses, las decisiones que determinarán el futuro de su gobierno. Es muy probable que incluso deba enfrentarse al gran capital, reacio a apoyar lo más novedoso de su plan de gobierno. Si el presidente se echa para atrás, el gran capital habrá ganado la partida una vez más y su gobierno, entonces, tendrá que resignarse a hacer lo mismo que los anteriores, acumular y agravar todavía más los problemas nacionales, al mismo tiempo que intenta disfrazarlos con publicidad. Si este fuera el caso, al país le esperan años más duros todavía.

A la hora de interpretar la evaluación pública de los primeros cien días del presidente Saca no hay que perder de vista que ésta se fundamenta en percepciones. En cierto sentido, se trata más de la valoración de la imagen proyectada que de la gestión realizada. Así, pues, de nuevo ha salido a relucir el viejo problema

de las relaciones entre la realidad material y la realidad virtual. Una lectura “negativa” de estas relaciones se concentraría en la disociación predominante entre la población. Mientras el presidente Saca goza de una buena imagen, la realidad socioeconómica reclama cambios drásticos y urgentes. La cuestión es, entonces, por qué esas evaluaciones no se corresponden y por qué la situación socioeconómica no se asocia con los quince largos años de gestión de ARENA. Sin embargo, el fenómeno admite también una lectura “positiva”, la cual vería en esa disociación una oportunidad. La buena imagen percibida podría ser una oportunidad única para actuar y transformar la realidad nacional, tal como lo demanda la mayoría de la gente. La imagen positiva del presidente Saca no debiera servir para encubrir una situación socioeconómica muy precaria, sino para transformarla.

El presidente Saca se encuentra en una encrucijada, cien días después de asumir la dirección del poder ejecutivo. Tiene a su favor una posición política envidiable para cualquier gobernante: posee una imagen positiva entre la población, goza de un capital político enorme, derivado del caudal de votos con el cual fue elegido, preside el partido de gobierno y, por lo tanto, tiene capacidad para influir en su conducción, y cuenta con un ambiente institucional propicio para el cambio social. Pero ahora debe decidir entre utilizar este capital político para empujar al país por la ruta del desarrollo humano sostenido o utilizarlo para favorecer a su partido y a los pequeños grupos privilegiados de siempre.

San Salvador, 21 de septiembre de 2004.